

XXXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES:

Representatividad y legitimidad en la construcción democrática

Las acciones afirmativas en México: actores y discusiones teóricas y prácticas en torno a las cuotas electorales para grupos en situación de discriminación

Dra. Lizeth Pérez Cárdenas

Mtra. Marisol Vázquez piñón

Introducción

En la última década, México ha implementado acciones afirmativas para la postulación de candidaturas de grupos en situación de discriminación, tanto en cargos locales como federales. Las medidas de nivelación fueron impulsadas por las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, quienes a través de acuerdos y sentencias definieron: los grupos, el número de espacios y la forma de acreditar la pertenencia a dichos grupos con dos criterios la autoadscripción y la autoadscripción calificada.

Como resultado de la aplicación de dichas medidas, en la elección federal de 2021 para la Cámara de Diputados y Diputadas, 65 personas resultaron electas: 6 personas afroamericanas, 8 con discapacidad, 4 de la diversidad, 36 indígenas y 11 migrantes, lo que representó un avance significativo en la representación descriptiva y simbólica de dichos grupos.

Si bien los avances han sido notables, en 2023 el legislativo aprobó el denominado “Plan B” (DOF, 2023), que consistió en una serie de reformas a las leyes electorales que incluyen entre otros, la regulación de acciones afirmativas por parte del Congreso. Al analizar las medidas planteadas, se puede observar que la legislación es contraria al principio de progresividad, pues considera sólo 25 postulaciones para ser distribuidas en seis grupos en situación de discriminación, siendo la acción afirmativa para personas indígenas la más afectada por el número de espacios que se reducen. Además, se limita el papel de las autoridades electorales para la implementación de acciones compensatorias futuras.

El “Plan B” fue impugnado por diferentes actores quienes interpusieron diversas acciones de inconstitucionalidad. Después de un análisis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso incurrió en graves violaciones al proceso legislativo puntualizando los argumentos de seis de éstas: 1) el poco tiempo para la discusión, las y

los legisladores tuvieron cuatro horas y media para analizar 500 artículos de seis leyes; 2) Se omitió argumentar porque solicitaban la dispensa de los trámites del proyecto, 3) se modificaron artículos del paquete de reformas que habían sido aprobados por ambas cámaras, 4) la comisión de Estudios Legislativos del Senado no aprobó por mayoría la reforma, sin embargo, se turnó al pleno, 5) no se consultó a las personas indígenas, afroamericanas o con discapacidad y 6) hubo por lo menos dos publicaciones distintas del inciso C de la Gaceta Parlamentaria de seis de diciembre de 2022 (El Economista, 2023).

En septiembre de 2023 el INE aprobó por mayoría de votos las acciones afirmativas que se aplicarán en el Proceso Electoral de 2024, en el que se elegirán entre otros cargos, diputaciones y senadurías, para muchas personas especialistas y grupos de personas en situación de discriminación lo aprobado para este proceso electoral es regresivo de los derechos ganados pues a diferencia de 2021, las acciones afirmativas de este proceso electoral quedan a la determinación de los partidos políticos, además de que el modelo disminuye la probabilidad de que dichas cuotas se traduzcan en espacios en el congreso.

La propuesta de reforma conocida como “Plan B” y las acciones afirmativas aprobadas por el Consejo General del INE para 2024, permiten hacer algunas preguntas de investigación sobre el diseño e implementación de las acciones afirmativas consistentes en cuotas para candidaturas de grupos en situación de discriminación, por ejemplo, las consideraciones metodológicas para su diseño, las acreditación de candidaturas ante las autoridades electorales, la efectividad de las mismas y los abordajes teóricos sobre las identidades. En este sentido, el objetivo de la presente investigación es abonar al análisis de las acciones afirmativas en México y los debates teóricos y pragmáticos para su implementación y efectividad.

I. ¿Qué son y para qué sirven las acciones afirmativas?

Las acciones afirmativas son políticas diseñadas para corregir desigualdades históricas y estructurales que han afectado a ciertos grupos de personas derivado de injusticias sociales, culturales, económicas, políticas, geográficas, entre otras. Estas medidas fueron establecidas para revertir las desigualdades en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, que hay que recordar son parte de los derechos humanos contemplados en el apartado de derechos civiles y políticos, con la participación en asuntos públicos y elecciones y la protección de los derechos de las minorías. Entre las características de las acciones afirmativas se encuentra el hecho de que son temporales porque una vez que cumplen el objetivo para el que fueron diseñadas, desaparecen. Son proporcionales porque

no deben producir una desigualdad mayor a la que buscan eliminar; y, además, son razonables y objetivas porque se centran en solucionar aspectos de la injusticia para los grupos en situación de discriminación (TEPJF, 2015).

La jurisprudencia 11/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que es obligación del Estado mexicano realizar acciones afirmativas para proteger a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación con el fin de promover la igualdad sustantiva para el ejercicio y goce de sus derechos políticos y electorales. Cabe mencionar que, esta misma jurisprudencia alude que los elementos fundamentales de las acciones afirmativas se pueden describir en los siguientes aspectos:

- a) Objeto y fin: las acciones afirmativas tienen como fin hacer realidad la igualdad material, es decir, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación. Se enfocan en alcanzar la representación o participación equilibrada, y finalmente, establecer las condiciones mínimas necesarias para que las personas puedan desarrollar sus capacidades.
- b) Destinatarias: las personas y grupos beneficiarios de dichas políticas son los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación, ya que, con las acciones afirmativas podrán gozar y ejercer sus derechos.
- c) Conducta exigible. Son acciones que el Estado mexicano ha asumido como obligatorias, por lo que, para llevar a cabo las acciones afirmativas dichas políticas se valen de instrumentos y prácticas legislativas, ejecutivas y administrativas.

A nivel internacional, existen varios instrumentos y tratados que respaldan y promueven las acciones afirmativas. A continuación, se enuncian algunos de los fundamentos legales relacionados con ello:

- **Convención Americana sobre Derechos Humanos.** Párrafo 1 y 24. Estos artículos aluden al respetar los derechos y garantizar la no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, ya que, todas las personas son iguales ante la ley.
- **Declaración Universal de Derechos Humanos.** Artículo 1. Menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por

su parte, el artículo 7, reitera la igualdad ante la ley de los individuos y el derecho sin distinción, a la protección de la ley ante casos de discriminación.

- **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.** Artículo 2. Primer inciso. Suscribe sobre el respeto y la garantía de los individuos al respecto de sus derechos sin distinción alguna o cualquier otra condición social. En el artículo 25 se establece que todos los ciudadanos gozarán, sin distinción y sin restricciones del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores, y tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
- **Convención Americana de los Derechos Humanos.** En el artículo 23. Primer inciso. Todas las personas ciudadanas deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de personas representantes libremente elegidas; de votar y ser elegidas en elecciones periódicas, realizadas por sufragio universal y por voto secreto que garantice la libre expresión.
- **Declaración y Programa de Acción de Viena.** Párrafo 24. Se destaca la importancia de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.

Respecto del marco jurídico nacional encontramos su fundamento en las siguientes disposiciones:

- **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).** Artículo 1. Establece que en México todas las personas tienen y gozarán de los **derechos humanos** reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales que el país ha firmado. El ejercicio de los derechos humanos, por lo tanto, no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia CPEUM establezca. Asimismo, señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán atendiendo al principio pro-persona, es decir, favoreciendo en todo momento a las

personas en su protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Se señala que queda prohibida toda discriminación motivada por cualquiera de los siguientes criterios: origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En este sentido, la diversidad de la población que compone la nación mexicana se ve protegida desde el ámbito constitucional, motivo por el cual tanto las autoridades como los entes públicos del Estado mexicano tienen el deber de adoptar las medidas tendentes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, sin discriminación.

Adicional, en el artículo 4 de la CPEUM, se fortalece la garantía de la igualdad sin distinción por cualquiera de las condiciones de la diversidad humana y se prohíbe la discriminación por cualquier motivo para asegurar la igualdad sustantiva, es decir, la igualdad de trato en el ejercicio pleno de los derechos de las personas, lo anterior, a pesar de reconocer las diferencias existentes.

Cabe mencionar que se entiende por no discriminación diversas conductas que tengan por objeto o resultado impedir o restringir los derechos humanos de las personas y atentar contra la dignidad humana, ya sea por el ejercicio de distinciones o por la negación o exclusión de derechos.

Es preciso enfatizar que el principio de igualdad y no discriminación de la Constitución obliga a todas las instituciones del país a implementar políticas públicas de trato preferente, así como la creación normativa para la actuación de frente a la igualdad estructural.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para fortalecer el derecho al voto, en el artículo 7, párrafos 1 y 3 alude que es derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos votar y obligación para los partidos políticos

la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), por su parte, conforme a su artículo 1, párrafo 1, tiene como objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como lo indica el artículo 1 de la CPEUM con la intención de promover la igualdad de oportunidades y de trato. Es así como en el párrafo 2, fracción VIII menciona que el INE como organismo constitucional autónomo que ejerce las atribuciones de un poder público federal, tiene la obligación de adoptar las medidas para que todas las personas gocen de todos los derechos y libertades consagrados en la CPEUM, sin discriminación.

La discriminación, entonces se va a entender de conformidad con el artículo 9, párrafo 1, fracción IX de la LFPED como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades.

Pone énfasis en que dichas situaciones ocurran motivados por el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro. Enfatiza que se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.

para poner alto a la discriminación, el artículo 15 Bis de la LFPED, obliga a los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia a realizar las medidas de nivelación, inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. Esta medida antidiscriminatoria debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, sin olvidar incorporarla en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.

En el artículo 15 Séptimus de esta misma ley, se define que las acciones afirmativas son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Las acciones afirmativas, entonces, se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad.

Estas acciones se fortalecen con el artículo 15 Octavus, párrafo 1 de la LFPED que dispone que las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas para favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y subrepresentados, en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas aplicadas a personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

II. Diferencias entre las acciones afirmativas aprobadas en 2018, 2021 y 2024

En tres procesos electorales federales el INE ha aprobado acuerdos para establecer acciones afirmativas consistentes en cuotas para candidaturas de grupos en situación de discriminación. En 2018 el Consejo General del INE determinó establecer una acción afirmativa con el objetivo de que las comunidades indígenas contaran con una representación garantizada en la Cámara de Diputados. Así, el Acuerdo INE/CG508/2017 estableció la obligatoriedad de los partidos políticos o coaliciones de postular fórmulas integradas por personas que se autoadscriban como indígenas en al menos, 12 de los 28 distritos electorales con población indígena, de los cuales 50% corresponderían a mujeres y 50% a hombres.

El acuerdo fue impugnado, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la sentencia SUP-RAP-726/2017 ratificó los lineamientos para el registro de candidaturas emitidos por el INE y aumentó a 13 los distritos electorales que tendrían que tener una candidatura indígena, al considerar que estas potencian el principio de pluralismo cultural reconocido en la Constitución, además de incorporar la denominada “autoadscripción calificada” para garantizar que los partidos

políticos postulan a candidatas y candidatos indígenas que tengan algún vínculo comunitario.

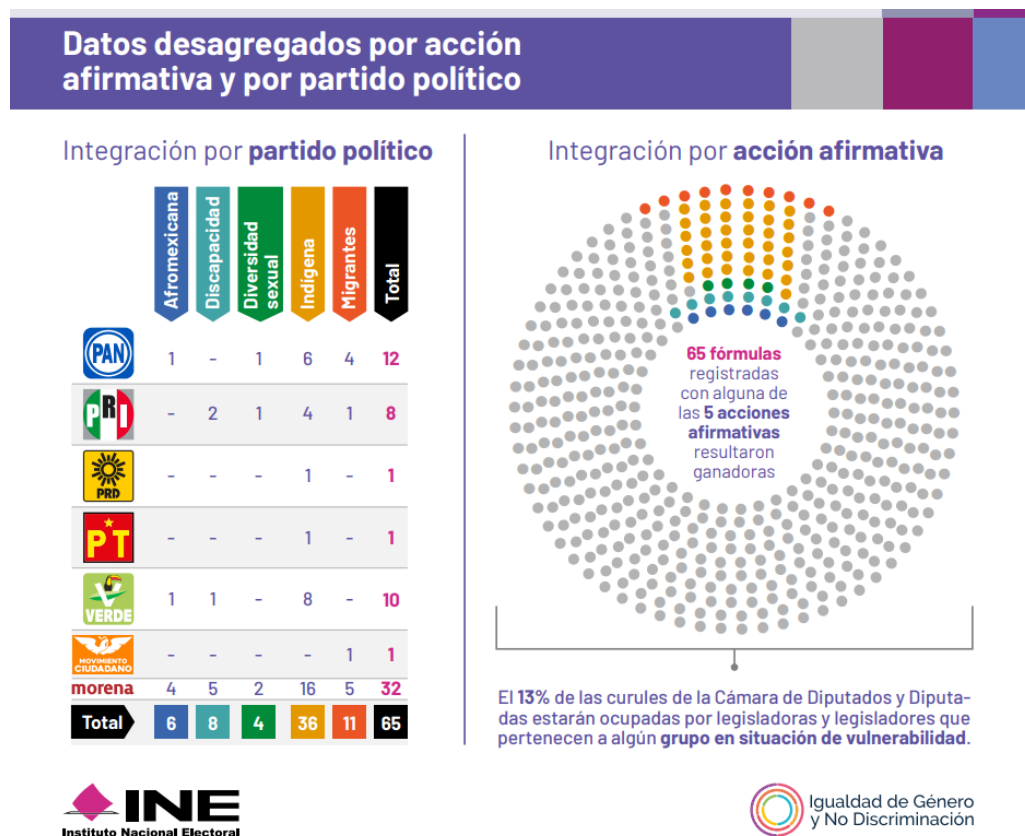
La incorporación de esta acción afirmativa se tradujo en que en los 13 distritos electorales se inscribieran 44 formulas, de las cuales 19 (43.18%) estuvieron encabezadas por mujeres y 25 (56.81%) estuvieron encabezadas por hombres. Los resultados de esta elección significaron que 10 hombres y 3 mujeres “indígenas” obtuvieran el triunfo.

En el proceso electoral 2020-2021 el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG572/2020 en el que se establecían acciones afirmativas para pueblos indígenas en candidaturas de Mayoría Relativa (MR) y Representación Proporcional (RP); no obstante, el acuerdo fue impugnado dando como resultado la sentencia SUP-RAP-121/2020 y Acumulados de la Sala Superior del TEPJF, en dicha sentencia, el TEPJF mandaba al INE a verificar y modificar las acciones para pueblos indígenas, incorporar acciones para personas con discapacidad y otros grupos en situación de discriminación. En acatamiento a la sentencia antes mencionada, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG18/2021 en el que abrió cuotas para los siguientes grupos en situación de discriminación:

- Personas indígenas: 21 distritos de Mayoría Relativa y 9 fórmulas Representación Proporcional.
- Personas con discapacidad: 6 distritos de Mayoría Relativa Mayoría Relativa y 2 fórmulas de Representación Proporcional.
- Personas afromexicanas: 3 distritos de Mayoría Relativa y 1 fórmula de Representación Proporcional.
- Personas de la diversidad: 2 distritos de Mayoría Relativa y 1 fórmula de Representación Proporcional.
- Después de contar con estas acciones afirmativas para distintos grupos en situación de discriminación, el acuerdo fue impugnado nuevamente ante el TEPJF, lo que se tradujo en la emisión de la sentencia SUP-RAP-21/2021 en la que se pedía incorporar acciones para personas migrantes y residentes en el extranjero. En acatamiento a la sentencia, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG160/2021 en el que se incorporan acciones para personas migrantes y residentes en el extranjero:
- Personas migrantes y residentes en el extranjero: 5 fórmulas de Representación Proporcional.

Los resultados de dicha acción afirmativa se tradujeron en 65 personas que fueron electas como diputadas y diputados para conformar la LXV Legislatura, nombrada como la "Legislatura de la Inclusión".

Infografía 1. Acción afirmativa y partido político



Fuente: UTIGyND [INFOGRAFIA Estadísticas Electorales Correc6_05.pdf \(ine.mx\)](#)

En términos de acceso la acción afirmativa resultó efectiva pues 13% de las curules de la Cámara de Diputados y Diputadas fueron ocupadas por legisladoras y legisladores pertenecientes a algún grupo en situación de vulnerabilidad, incluso hubo muchas más personas ganadoras respecto del mínimo de cuotas que debían postular los partidos políticos.

El 8 de septiembre de 2023, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG527/2023 el que se emiten los criterios para el registro de candidaturas del proceso electoral de 2024, donde se establecen las acciones afirmativas para la postulación de diversos grupos en situación de discriminación, el acuerdo mencionado considera importantes diferencias respecto de lo que se había establecido en el proceso electoral

anterior de 2021. En el numeral 65 se establecen las reglas de las acciones afirmativas las cuales se resumen en el siguiente apartado.

Personas indígenas/ naciones mexicanas

Establece el acuerdo que, respecto de las diputaciones por el principio de mayoría relativa, los PPN o coaliciones postulen, como acción afirmativa, dieciocho fórmulas integradas por personas que se autoadscriban como indígenas, distribuidas conforme a lo siguiente:

- a) Se dividirán los distritos en tres bloques según su concentración poblacional indígena: alta, media y baja concentración. Cada bloque se dividirá en tres bloques según la votación obtenida por cada PPN en el PEF anterior inmediato: votación baja, votación media y votación alta.
- b) Se postularán seis fórmulas en cada uno de los bloques de concentración de población indígena, conforme al Anexo TRES del presente Acuerdo.
- c) Las fórmulas que se postulen en cada bloque de concentración poblacional deberán distribuirse equitativamente en los bloques de votación; es decir dos fórmulas en cada bloque de votación baja, media y alta, conforme al Anexo TRES del presente Acuerdo”

La acción afirmativa para personas indígenas en 2024 no considera los distritos indígenas como espacios donde se tienen que postular las candidaturas, también disminuye las fórmulas de mayoría relativa al pasar de 21 en el proceso pasado a 18. Se refiere a esta cuota como de las “naciones mexicanas”, se considera la acción afirmativa por franjas. En cuanto a la representación proporcional, aumentan los espacios de 9 a 12, y se aplica con un modelo más complejo que el del proceso electoral pasado:

“Los primeros tres lugares de todas las listas de representación proporcional integrarán la primera franja, los siguientes tres lugares de las listas conformarán la segunda franja, los posteriores cuatro lugares de las listas comprenderán la tercera franja, de tal suerte que ese patrón (3-3-4) se repita hasta agotar los cuarenta lugares de las listas.

- En cada franja deberá postularse al menos una fórmula integrada por personas indígenas. No obstante, como ha ocurrido en PEF anteriores, en caso de que los PPN decidan registrar listas por el principio de representación proporcional con un número inferior a cuarenta fórmulas de candidaturas, el número de postulaciones por franja deberá ajustarse para garantizar que, en todo caso, se postulen las doce fórmulas de personas indígenas”

En el propio acuerdo se da cuenta de que este modelo denominado de franjas “implica una disminución de la carga a los partidos políticos” al ser más flexibles sobre donde se deben

postular las fórmulas. Para 2024 también se prevén acciones afirmativas para el Senado donde los partidos y coaliciones deben postular al menos 5 fórmulas por cualquiera de los dos principios.

El cambio más relevante entre 2021 y 2024 es el hecho de hacer cuotas por cada grupo en situación que cada partido debía cumplir, el modelo actual considera al menos doce fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa integradas por personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual o en pobreza, distribuidas a razón de cuatro fórmulas en cada uno de los bloques de baja, media y alta votación.

Se establece que los PPN deberán postular ocho fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional pertenecientes a estos grupos, además de personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero en franjas de cinco en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales. En todos los casos, los PPN y coaliciones deberán postular al menos una fórmula por cada acción afirmativa.

Señala el Acuerdo que “En caso de que los PPN decidan registrar listas por el principio de representación proporcional con un número inferior a cuarenta fórmulas de candidaturas, el número de postulaciones por franja deberá ajustarse para garantizar que, en todo caso, se postulen las ocho fórmulas correspondientes a estas acciones afirmativas.” En cuanto a las senadurías se deberán postular nueve fórmulas conforme a lo siguiente: cinco fórmulas de las naciones mexicanas, una fórmula de personas afromexicanas, una con discapacidad y una de la diversidad sexual, por cualquiera de los dos principios, así como una fórmula de personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero en la lista por el principio de representación proporcional. Las fórmulas que se postulen por el principio de mayoría relativa deberán distribuirse de manera homogénea entre los tres bloques de competitividad, mientras que las que se postulen por el principio de representación proporcional deberán postularse por franjas de cinco dentro de la lista. Se precisa que las postulaciones tanto en mayoría relativa como en representación proporcional tendrán que iniciar en el tramo de mayor competitividad.

En el siguiente apartado se analizan algunas de las consideraciones adicionales:

Personas afromexicanas, permanece la autoadscripción simple para la postulación.

Personas con discapacidad, permanece la autoadscripción calificada.

Personas con diversidad sexual, permanece la autoadscripción simple para la postulación y el límite de tres candidaturas para personas no binarias.

Personas residentes en el extranjero. permanece la autoadscripción calificada, deben acreditar una residencia efectiva en el extranjero de más de seis meses anteriores a la fecha de inicio del plazo para el registro de candidaturas.

Personas en pobreza, autoadscripción calificada, las personas que busquen la candidatura en esta acción afirmativa no podrán tener un ingreso, por ningún medio, arriba de “la línea de pobreza por ingreso” estipulado por el CONEVAL con corte al mes de enero de 2024, se debe presentar 1. Comprobante de todos los ingresos. 2. Llenado del formato de capacidad económica.

Conclusiones:

El tema de la implementación de acciones afirmativas es de gran importancia para las democracias contemporáneas donde se busca ampliar la representación de los grupos históricamente discriminados, en este sentido, las acciones realizadas por el INE en los últimos procesos electorales dan cuenta de la complejidad del diseño e implementación de las mismas.

Respecto de lo aprobado en 2024 consideramos que existe un retroceso de los derechos ganados por diferentes grupos, pues el modelo aprobado por la mayoría de consejeras y consejeros privilegia la libre elección de los partidos políticos vs la obligación de tener cuotas concretas para cada grupo, en este sentido también es importante destacar que el Acuerdo no resuelve algunas de las exigencias de diferentes grupos que exigen una autoadscripción calificada para evitar suplantación de identidades y la simulación como es el caso de las personas afromexicanas.

En el mismo sentido se considera que debe haber un mayor análisis y discusión sobre la acción afirmativa para personas en situación de pobreza pues como quedó diseñada la misma considera solo un tema de ingreso lo cual está rebasado desde la propia literatura en la materia, además de ello, la pobreza constituye no una identidad sino una condición social.

Es importante mencionar que si bien el Acuerdo del INE ya fue publicado en el DOF diferentes grupos han manifestado su descontento con el mismo e iniciarán los litigios estratégicos para defender lo que consideran había sido un avance en el reconocimiento de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, por tanto, el TEPJF tendrá un importante papel en las determinaciones siguientes.

Bibliografía

- Acatamiento EXP. SUP-RAP-21/2021 y acumulados INE/CG160/2021. Acuerdo del Consejo General del INE por el que, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-21/2021 y Acumulados, se modifican los criterios aplicables para el Registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el Proceso electoral federal 2020-2021, aprobados mediante Acuerdos INE/CG572/2020 e INE/CG18/2021:

<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118027/CGex202103-04-ap-1.pdf>

DOF. (2 de marzo de 2023). DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones electorales. Obtenido de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681325&fecha=02/03/2023#gsc.tab=0

El Economista. (22 de junio de 2023). Invalida la SCJN el “plan B” electoral de AMLO. Obtenido de <https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-Suprema-Corte-declara-la-invalididad-del-plan-B-electoral-de-AMLO-20230622-0047.html>

INE/CG572/2020. Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueban los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los PPN y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021: <https://repositoriodocumental.ine.mx/pdfjs-flipbook/web/viewer.html?file=/xmlui/bitstream/handle/123456789/115204/CGex202011-18-ap-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

INE/CG18/2021. Acuerdo del Consejo General INE por el que en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, se modifican los

criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los PPN y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el proceso electoral federal 2020-2021, aprobados mediante acuerdo INE/CG572/2020:

<https://repositoriodocumental.ine.mx/pdfjs-flipbook/web/viewer.html?file=/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-ap-12.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Infografía de acciones afirmativas en diputaciones por Partido Político Nacional a Nivel Federal (2020-2021).

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2022/03/INFOGRAFIA_ACCIONES_AFIRMATIVAS_EN_POSTULACIONES_DE_CANDIDATURAS_PROCESO_ELECTORAL_20202021_Correc9_09.pdf

Estadísticas Electorales. Integración de la cámara de Diputados y diputadas (2021).

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/10/INFOGRAFIA_Estadisticas_Electorales_Correc6_05.pdf

SUP-JDC-56/2023. Juicio para la protección de los Derechos político-electorales del Ciudadano. <https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/monterrey/SM-JDC-0056-2023.pdf>

TEPJF. (2015). ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES. Obtenido de

<https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=A>
C-